

Diversidad y caos

► Médicos del Mundo elaboró a finales de noviembre un informe sobre la aplicación en España de la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la red sanitaria normalizada impulsada por el Gobierno en el marco de las medidas del control del gasto.

► La entidad humanitaria llegó a la conclusión de que la medida se ha implantado de forma desigual, por lo que la heterogeneidad y el caos eran los rasgos que definían los tres primeros meses de vigencia de la restricción de los derechos sanitarios a los inmigrantes.

► El desconcierto, según Médicos del Mundo, afecta tanto a los usuarios como al personal sanitario encargado de arbitrar la exclusión.

► Autonomías que no aplican la norma: Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi.

► Comunidades que aplican la exclusión pero han desarrollado herramientas administrativas para seguir atendiendo a los sin papeles: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

► Las regiones que siguen la norma estatal de forma estricta son Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón.

adjunto de Médicos del Mundo. También Amnistía Internacional se congratuló. Es una "muy buena noticia", indicó Marta Mendiola. "En época de crisis, los derechos humanos están siendo secuestrados por un debate económico, pero no son un logro de los tiempos de bonanza", añadió.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, mostró su alegría por lo que supone de reconocimiento al derecho a la asistencia y hacia los médicos que objetores a esta medida. "Celebremos este auto y su sensibilidad", añadió el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

El alto tribunal no considera que la exclusión sanitaria sea un ahorro

La Organización Médica: "Celebremos ese auto y su sensibilidad"

A los motivos que expone el Constitucional, algunos juristas añaden otros que socavan aún más la solidez legal de la exclusión sanitaria. La norma puede chocar, advierte Pascual Aguero, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, con los estatutos de autonomía de comunidades como Andalucía, Cataluña, País Vasco o Aragón que recogen expresamente la universalidad de la atención sanitaria.

Además de País Vasco, hay otras tres autonomías que no aplican la restricción sanitaria. Se trata de Asturias, Andalucía y Cataluña. En ninguno de estos tres casos, el Gobierno ha planteado ningún recurso, ya que no han desarrollado ningún decreto que colisione con la norma estatal. Las barreras al acceso a la sanidad se esquivan *de facto* (Andalucía) o mediante instrucciones administrativas (Cataluña y Asturias). "Actúan en el ámbito de sus competencias", sostiene una portavoz del Ministerio de Sanidad.

a través de esta red de profesionales que se niegan, por conciencia, a desatender a los sin papeles. Y como su caso hay otros en comunidades como Madrid, que también aplica el decreto a rajatabla, y donde ha florecido el movimiento *Yo sí sanidad universal*, donde tratan de agruparse.

"Los sanitarios tenemos un papel en la sociedad que no se vincula solo al cumplimiento de nuestro trabajo en una institución. También tenemos un compromiso con la sociedad. Antes que trabajadores de una empresa, sea pública o privada, somos médicos y defendemos a nuestros pacientes de los intereses que atentan contra su derecho a la salud y contra su seguridad. Y la reforma que excluye a los inmigrantes en situación irregular es un atentado claro", dice Novoa.



Federico Mayor Zaragoza, ayer durante la presentación de Stop Ley Wert. / CARLOS ROSILLO

Una nueva plataforma contra la 'ley Wert'

- Mayor Zaragoza lidera una protesta para parar la reforma
- Los universitarios denuncian que traerá desigualdad

PILAR ÁLVAREZ
Madrid

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, parece cada vez más acorralado con su reforma educativa. Una nueva plataforma, encabezada por el exministro de Educación y exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, surgió ayer para pedirle que retire el borrador y parta de cero. Se llama *Stop Ley Wert* y considera la propuesta oficial un "gran atentado" contra el modelo de educación pública. Mientras Wert comparecía en el Senado, los estudiantes universitarios se reunieron con miembros de su gabinete para expresar también su desacuerdo. Los alumnos de casi la mitad de los campus públicos creen que su proyecto impulsa la desigualdad y denuncian que no han contado con ellos. El ministro lleva días aludiendo a un pacto educativo en el que nadie se siente interpelado y del que no eliminará algunas de las propuestas que han levantado más ampollas.

El Congreso rechazó, con votos de PP y UPyD, retirar de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) las alusiones al catalán y a la invasión competencial. En el Senado, Wert aludió a otro de los aspectos más polémicos: la competitividad. "Mejorar la educación de los españoles requerirá decir que tendremos una juventud mejor educada y preparada para competir en un mundo global". A Mayor Zaragoza (y a los miles de ciudadanos que han respaldado su manifiesto en las redes sociales) les parece que ese no es el camino. "Es absolutamente intolerable

que una ley se piense solo en términos de competitividad económica", criticó ayer Mayor Zaragoza. Minutos antes, en el vídeo de presentación de la plataforma, comentó por el dúo cómico Gomaespuma, aparecían alumnos en una cadena de montaje. Para la LOMCE, decían, los estudiantes "son solo números". No quieren ni oír hablar del pacto que pide Wert mientras mantiene sobre la me-

Los estudiantes ven una "barrera económica" en los muchos exámenes

No quieren oír hablar de pacto si persiste la segregación

sa un borrador que ampara la segregación de alumnos por sexos, refuerza la asignatura de religión y remueve las competencias lingüísticas.

Mayor Zaragoza pidió ayer que se negociase una ley "productiva de un país genuinamente democrático" en el que se consulte a los que de verdad saben de educación: los profesores.

Apeló a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para llamar a "la rebelión" contra una propuesta que "desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros", según el comunicado que leyó y que respaldan organizaciones como Cuadernos de Peda-

gogía o el Movimiento de Renovación Pedagógica.

Los universitarios también se plantaron contra la Ley de Mejora de la Calidad. Representantes de una veintena de campus públicos presentaron ayer un documento de rechazo.

El modelo que sustituirá a la Selectividad (con pruebas diferentes por campus y comunidades) les parece "distorsionador", porque permite a las universidades fijar los criterios de selección. "Probablemente, esta vía solamente la empleen los centros o títulos con exceso de demanda", alegan. Y han denunciado en el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Cenue) que este modelo "atropella" la igualdad. "Si cada universidad y los centros que la conformen, por extensión, pueden plantear sus procedimientos de admisión (pruebas) limitarán las opciones del alumnado, que antes podía elegir entre todos los centros". Tener que desplazarse para hacer exámenes en distintos campus, con el pago de precios públicos que prevén por cada prueba, supondrá "una barrera económica infranqueable" para parte del estudiantado.

Los universitarios también creen que la LOMCE invade competencias lingüísticas. Y se lamentan de que no se puede mejorar un sistema cambiando de normativa general "cada dos por tres". Una de las frases de su propuesta alternativa alude al dibujo animado de los alumnos en la cadena de montaje. La ley convierte el sistema educativo "en una academia de preparación de evaluaciones continuas, encaminadas a la preparación de mano de obra".

vasco. Y si se impone a otros condicionantes en la sentencia, supondrá un torpedo en la línea de flotación de las medidas de restricción sanitaria del Gobierno que marginan a los sin papeles.

Mientras, los populares cerraron ayer filas en torno al polémico veto sanitario, juristas, médicos, ONG, entidades de inmigrantes y los partidos de la oposición reclamaron al Ejecutivo que devuelva a los sin papeles el derecho íntegro a la salud. "El auto es un mensaje muy claro al Gobierno para que restituya la universalidad de la atención sanitaria", trasladó Stefan Meyer, director

tados", dice. Así, antes de que llegue el primer enfermo o al acabar con el último, les examina y, como ha hecho con Fatma, les receta los medicamentos que necesitan. Ya no tienen acceso a la financiación de los fármacos —la sanidad cubre un porcentaje de algunos de ellos—, pero al menos pueden comprar con receta aquellos que no se suministrarían sin la indicación médica. "Gracias a eso y a que, de momento, los podemos pagar, mi hermana está mejor", dice Mohamed.

Cuando a Fatma le vuelva a dar uno de los brotes de su enfermedad, volverá a la consulta de Novoa. Entonces, este avisará a un reumatólogo, también objeto, que le hará una revisión más especializada. El objetivo, explica, es atender a todos los pacientes de manera adecuada